DECRETOS DEL GOBIERNO NACIONAL

Retención cafetera

DECRETO NUMERO 1060 DE 1980
(mayo 8)

por el cual se fija la retención cafetera y se adoptan otras medidas.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales y oído el concepto del Comité Nacional de Cafeteros,

DECRETA:

Artículo primero. El porcentaje de retención cafetera que el artículo 63 del Decreto-Ley 444 de marzo 22 de 1967 y normas concordantes autorizan señalar al gobierno, será igual a una cantidad de café pergamino equivalente al 62% del café excelso que se proyecte exportar, de la calidad y tipo que señale la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Parágrafo. El porcentaje de retención cafetera establecido es equivalente a 55.20 kilogramos de café pergamino por cada saco de 70 kilogramos de café excelso, que se proyecte exportar.

Artículo segundo. Esta norma se aplicará a los registros de exportación de café que se expidan con base en contratos de venta de café registrados a partir del 9 de mayo de 1980.

Artículo tercero. Cuando los exportadores de café necesiten adquirir café del Fondo Nacional del Café, con el objeto de atender sus compromisos externos, el Fondo Nacional del Café por conducto de la Federación Nacional de Cafeteros podrá vender a los exportadores parte de la retención recibida en especie, o cafés adquiridos por el Fondo Nacional a cualquier otro título.

Artículo cuarto. Las ventas de café a los exportadores a que se refiere el artículo anterior se efectuarán a un precio básico de café pergamino que, periódicamente señalará el Comité de Precios Internos previsto en el artículo 256 del Decreto-Ley 444 de 1967.

Artículo quinto. Derógase el Decreto 1302 de junio 4 de 1979 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo sexto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 8 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

Exploración y explotación de carbón mineral

DECRETO NUMERO 1155 DE 1980
(mayo 14)

por el cual se reglamenta la Ley 61 de 1979.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

DECRETA:

Artículo 1o. A partir del 25 de enero de 1980, la exploración y explotación del carbón mineral de propiedad nacional solo puede realizarse mediante el sistema de aporte otorgado a empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional que tengan entre sus fines dichas actividades.

Artículo 2o. El aporte de que tratan la Ley 61 de 1979 y el presente decreto, es el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Minas y Energía inviste a una empresa comercial e industrial del Estado del orden nacional de la facultad de explorar y explotar las reservas carboníferas que puedan existir en el suelo o el subsuelo de una zona determinada. Dicha facultad se otorga para toda la vida económica de los yacimientos.

Artículo 3o. El aporte para explorar y explotar carbón se podrá hacer a la empresa Carbones de Colombia S. A. - Carboacol, o a otras empresas comerciales e industriales del Estado del orden nacional que por sus normas orgánicas y estatutarias estén autorizadas para dedicarse a tales trabajos de minería.

El aporte se hará a solicitud de las entidades de que trata el inciso anterior.

Artículo 4o. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo primero de este decreto:

a) Las áreas objeto de permiso para explorar y explotar carbón o de aquellos en los cuales el carbón haya sido objeto de la explotación y que hayan sido otorgados por medio de resolución proferida antes del 25 de enero de 1980.

b) Las áreas objeto de licencias de exploración de carbón cuya resolución de otorgamiento se hubiere proferido antes del 25 de enero de 1980.

c) Las áreas carboníferas que habiendo sido exploradas técnicamente con base en una licencia de exploración deban ser concedidas por contrato, para ser explotadas en razón de que sus titulares ejerciten la facultad que les confieren los artículos 81, 82 y 83 del Decreto 1275 de 1970.

d) Las áreas que habiendo sido explotadas con base en permisos sobre carbón deban ser concedidas por contrato en virtud del derecho preferencial que a sus titulares otorga el artículo 23 del Decreto 2181 de 1972.

e) Las áreas objeto de contratos de concesión para explotar carbón perfeccionados antes del 25 de enero de 1980.

f) Las áreas carboníferas objeto de solicitudes de licencias o permisos o de propuestas de concesión, cuyos interesados acrediten en forma fehaciente haberlas estado explotando desde antes del 11 de diciembre de 1973 y que continuaban explotándolas el 25 de enero de 1980.

La concepción contemplada en este literal se refiere a solicitudes y propuestas correspondientes a áreas dentro de las cuales se realice por el interesado la explotación del carbón en forma ostensible y efectiva. Para la viabilidad de esta excepción el Ministerio de Minas y Energía, antes de continuar el trámite del negocio, realizará de oficio una visita a dichas áreas y con base en ella, resolverá si se adelanta o rechaza la solicitud o propuesta.

Artículo 5o. Es entendido que los yacimientos carboníferos reconocidos como de propiedad privada y cuyos titulares hubieren cumplido y acreditado oportunamente las condiciones y requisitos señalados en la Ley 20 de 1969 y sus normas reglamentarias, están excluidos de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 61 de 1979 y en el primero de este decreto.

Artículo 6o. El Ministerio de Minas y Energía procederá de plano y por resolución motivada a desanotar y archivar todos los negocios, solicitudes y propuestas para explorar y explotar carbón, distintas de las enumeradas en el artículo cuarto de este decreto. Los interesados podrán pedir el desglose y entrega de los documentos técnicos que hubieren presentado en dichos asuntos.

Artículo 7o. El Ministerio de Minas y Energía, al otorgar licencias de exploración de minerales concesibles, hará expresa exclusión del carbón que pueda encontrarse en la respectiva zona salvo el caso contemplado en el numeral F, del artículo cuarto de este decreto.

Artículo 8o. Carbocol y las demás empresas comerciales e industriales del Estado del orden nacional que tuvieren solicitudes y propuestas para explorar o explotar carbón, podrán solicitar que las zonas respectivas les sean otorgadas en aporte por su misma extensión y linderos o abarcando extensiones aledañas.

Artículo 9o. Cuando se pretenda hacer un aporte para explorar y explotar carbón en favor de una entidad distinta de Carbocol, el Ministerio de Minas y Energía solicitará concepto previo a esta empresa con el objeto de establecer si la exploración o explotación del área respectiva o los yacimientos de carbón que en ella puedan encontrarse, forman parte de sus planes y programas. En caso afirmativo se pondrá esta circunstancia en conocimiento de la entidad interesada para efecto de que acuerde con Carbocol la forma y condiciones en que se deba emprender la exploración y explotación de dicha área o de dichos yacimientos.

Artículo 10. En los aportes de que trate este decreto, las entidades beneficiarias podrán llevar a cabo las labores de prospección, exploración y montaje, construcción de infraestructura de transporte y embarque de carbón, transformación y comercialización del mineral, directamente o mediante contratos de asociación, operación, servicios, administración o de cualesquiera otras clases.

Los contratos a que se refiere el inciso anterior, así como los subcontratos que de ellos se deriven, por tener como fin último, especial y principal la explotación minera, no estarán sujetos a los requisitos y trámites que para contratación administrativa ordinaria establecen el Decreto 150 de 1976 y las disposiciones que lo adicionan y reforman, pero la entidad contratante deberá incluir las prescripciones sobre renuncia a reclamación diplomática cuando a ello hubiere lugar y podrá pactar el derecho a declarar administrativamente la caducidad.

Artículo 11. En ejercicio del derecho emanado del aporte de áreas carboníferas, las entidades beneficiarias podrán establecer libremente la oportunidad, duración o condiciones de los trabajos de prospección, exploración, montaje, construcción y explotación, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y técnicas de las zonas y yacimientos o la situación y perspectivas del mercado interno o externo del carbón.

Artículo 12. Las áreas de licencias, permisos y concesiones sobre carbón que por cancelación, caducidad, renuncia, vencimiento o cualquiera otra causa queden libres, solo podrán explorarse o explotarse por el sistema señalado en el artículo primero de este decreto. En los eventos mencionados, el ministerio remitirá a Carbocol toda la documentación de carácter técnico y económico que haya sido agregado a los referidos negocios.

Artículo 13. Las formalidades, los requisitos de trámite y de perfeccionamiento y la entrega material de los aportes para explorar y explotar carbón se regirán por el Decreto 1275 de 1970 y las normas que lo adicionan o reforman en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente decreto.

Artículo 14. Desde la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se ordene la iniciación del trámite de un aporte sobre el carbón, hasta un mes después de que se efectúe la correspondiente publicación en el Diario Oficial, podrán oponerse al otorgamiento del aporte únicamente las siguientes personas:

a) Los titulares de licencias de exploración, de permiso, concesión o aporte, que versen expresa y específicamente sobre carbón;

b) Quien tenga sentencia judicial de reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo carbonífero, que conserve su validez jurídica;

c) Quien tenga una solicitud o propuesta vigente sobre carbón siempre que demuestre que desde antes del 11 de diciembre de 1973 viene explotando dicho mineral en forma efectiva, ostensible y pacífica dentro de la respectiva área.

d) Quien demuestre que dentro del área objeto del aporte viene explotando carbón desde antes del 11 de diciembre de 1973 en las circunstancias y con la continuidad indicadas en el literal c) anterior. Esta oposición deberá contraerse exclusivamente a la zona en que se adelanten los respectivos trabajos y a aquella en la cual se

hayan establecido por el mismo interesado, en forma técnica, las reservas explotables que fundamenten tales trabajos.

Parágrafo 1o. El Ministerio de Minas y Energía antes de resolver sobre las oposiciones formuladas con base en los numerales c) y d) de este artículo practicará una visita a la zona con el objeto de establecer los hechos y circunstancias de la explotación del opositor.

Parágrafo 2o. No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, los explotadores de carbón a que se refieren los literales c) y d) podrán formular sus oposiciones hasta un año después de la entrega de la zona al beneficiario del aporte.

Queda en estos términos modificado, respecto de los aportes sobre carbón, el artículo decimosegundo del Decreto 2727 de 1979, que sustituyó el artículo 192 del Decreto 1275 de 1970.

Artículo 15. De conformidad con el artículo segundo de la Ley 61 de 1979, están exentas de impuestos de aduana las importaciones que realice toda persona natural o jurídica de los siguientes bienes:

a) Los equipos y maquinarias, sus accesorios y repuestos, los materiales y elementos para los mismos, que por su naturaleza y características se requieran para ejecutar exclusivamente las actividades propias de la minería de carbón en cualesquiera de sus etapas de exploración, explotación, beneficio y transformación.

b) Los equipos y maquinarias, sus accesorios y repuestos que por su naturaleza y características estén destinados a efectuar la sustitución de consumos de hidrocarburos por carbón.

c) Las materias primas y partes o componentes indispensables para la fabricación en el país de los equipos, maquinarias, accesorios y repuestos destinados a las actividades mineras o a la sustitución mencionada.

Artículo 16. Para efectos de conceder la exención consagrada en el artículo 2o. de la Ley 61 de 1979 se adoptan las siguientes definiciones:

a) Exploración: es el conjunto de actividades dirigidas a determinar en un área, la existencia de carbón en calidad y cantidad económicamente aprovechable. En estas actividades se incluyen las labores de prospección o exploración preliminares.

b) Explotación: es el conjunto de actividades dirigidas a la extracción técnica del carbón. En la explotación están comprendidas las obras y actividades propias del montaje minero, así como las del transporte, cargue y embarque del mineral, siempre que estas últimas sean inherentes, accesorias y exclusivas de la operación minera.

c) Beneficio: es el tratamiento del carbón explotado, mediante procesos de separación, trituración, molienda, lavado y otros similares, previos a su utilización.

d) Transformación: es el conjunto de procesos físicos, químicos o fisico-químicos a que se somete el carbón para la obtención de un primer producto susceptible de ser utilizado como insumo industrial o de ser directamente destinado al consumo.

e) Sustitución de hidrocarburos por carbón: es la acción tendiente a reemplazar el uso de hidrocarburos por carbón mineral mediante la introducción de procesos físicos, químicos o fisico-químicos que incluyan la utilización del carbón o de sus subproductos como fuente de energía o como materia prima, en forma técnica y económicamente factible. Estos procesos comprenden los que con el objeto mencionado se realicen por vía investigativa o experimental.

Artículo 17. Para disfrutar de la exención contemplada en el artículo anterior se requerirá concepto previo y favorable del Ministerio de Minas y Energía el cual será emitido con base en la demostración del interesado de que los bienes que pretende importar estarán destinados directa y exclusivamente a labores propias de la industria extractiva del carbón o a efectuar la sustitución de hidrocarburos, en uno u otro caso, en condiciones técnica y económicamente satisfactorias. El concepto de que trata el presente artículo será el único requisito o condición para que las autoridades de aduana y de comercio exterior den trámite a dicha exención.

Artículo 18. El Ministerio de Minas y Energía vigilará, por los medios que considere adecuados, la utilización y destino de los bienes importados con la exención de derechos de aduana de que trata este decreto. En caso de que se destinen o se utilicen, aun en forma transitoria, en fines distintos a los de la minería del carbón o a la sustitución de hidrocarburos, sin la autorización del Ministerio y de las autoridades aduaneras, se procederá al inmediato decomiso de tales bienes por parte de la Dirección General de Aduanas y a la

aplicación de las demás sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas generales sobre la materia.

Artículo 19. Para los efectos previstos en las normas tributarias, los equipos, maquinarias y repuestos destinados a efectuar la sustitución de hidrocarburos por carbón, podrán depreciarse en un plazo de cinco (5) años. Para el reconocimiento de esta deducción será necesario que el Ministerio de Minas y Energía certifique que tales activos reúnen las características y especificaciones apropiadas para la sustitución de hidrocarburos por carbón y que durante el año gravable respectivo han estado exclusivamente destinados a ese fin.

Artículo 20. Los sistemas, modalidades, requisitos y condiciones que señalan las normas y reglamentos tributarios en materia de depreciación serán aplicables a la deducción de que trata el inciso final del artículo segundo de la Ley 61 de 1979 en cuanto le sean compatibles.

Artículo 21. El Fondo Nacional del Carbón es un sistema especial de manejo de recursos cuya administración y disposición estarán a cargo de Carbocol en la forma y condiciones que se señalan en el presente decreto.

Artículo 22. Son recursos del Fondo Nacional del Carbón:

- a) El producido del impuesto establecido en el artículo cuatro de la Ley 61 de 1979, en las condiciones y cuantías señaladas en la misma.
- b) Los ingresos que se liquiden como producto de sus propias operaciones.
- c) Los aportes que reciba del presupuesto nacional, y
- d) Los demás bienes que se le asignen o transfieran a cualquier título.

Parágrafo. Los recursos en disponibilidad del Fondo podrán invertirse en documentos de depósito o en otros valores de suficiente liquidez y rentabilidad.

Artículo 23. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente a los siguientes fines:

- a) Financiar parcial o totalmente, operaciones e inversiones de Carbocol en proyectos y programas de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, embarque y comercialización del carbón.
- b) Financiar parcial o totalmente, inversiones directas en prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte y embarque de carbón, que emprendan otras empresas comerciales e industriales oficiales del orden nacional.
- c) Financiar a título oneroso proyectos y programas de la misma naturaleza que emprendan entidades descentralizadas, departamentales o municipales o personas naturales o jurídicas de carácter particular.

Parágrafo. Para que los recursos del Fondo se destinen a financiar proyectos de las entidades y personas mencionadas en este artículo será requisito indispensable que tengan definido su derecho a realizar dichas actividades de acuerdo con las disposiciones mineras.

Artículo 24. Carbocol podrá participar con recursos del Fondo en los proyectos y programas que lleven a cabo otras empresas oficiales o los particulares, bajo las formas de asociación, sociedad, operación, prestación de servicios o cualesquiera otras que le aseguren el control y la vigilancia de las inversiones.

Artículo 25. Los recursos del Fondo que se destinen a financiar los proyectos y programas de que tratan los numerales b) y c) del artículo veintitrés de este decreto no podrán aplicarse a cubrir directa o indirectamente, gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad o persona beneficiaria. En caso de hacerse, Carbocol podrá dar por terminados de inmediato los plazos de las obligaciones y hará efectivas las garantías que se hubieren establecido en la respectiva operación de financiamiento.

Artículo 26. Carbocol podrá imputar a los ingresos del Fondo hasta un cinco por ciento (5%) de los mismos por concepto de gastos de administración y recaudo.

Artículo 27. La Junta Directiva de Carbocol, con el voto favorable del ministro de Minas y Energía o de su representante, hará asignación periódica de los recursos del Fondo de conformidad con los planes, programas y presupuestos que le someta el gerente.

Artículo 28. El gerente de Carbocol autorizará y celebrará todos los actos y contratos en los cuales se utilicen los recursos del Fon-

do. Estos actos y contratos requerirán la autorización de la junta directiva de acuerdo con la cuantía que periódicamente ella misma señale.

Artículo 29. El gerente de Carbocol será el ordenador de gastos del Fondo con facultad de delegar estas funciones en otro empleado de la Empresa en la cuantía que considere conveniente.

Artículo 30. Los recursos y bienes del Fondo se manejarán en cuenta especial auditada por la Contraloría General de la República.

Artículo 31. El impuesto sobre explotación de carbón equivalente al cinco por ciento (5%) del valor en boca de mina del carbón extraído, creado por el artículo 4o. de la Ley 61 de 1979 y pagadero en dinero a partir del 1o. de enero de 1980, es un impuesto de carácter nacional que será recaudado por el Fondo Nacional del Carbón, por intermedio de Carbones de Colombia S. A., "Carbocol", según lo previsto en el parágrafo del artículo 3o. de dicha ley.

Las controversias que se susciten sobre las liquidaciones del impuesto serán tramitadas por las dependencias de la Dirección de Impuestos Nacionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 52 de 1977 y demás normas que rijan sobre la materia.

Artículo 32. El precio básico del carbón de boca de mina para la liquidación del gravamen será fijado por el Ministerio de Minas y Energía para todo el país y por vía general para cada semestre calendario.

Artículo 33. En la fijación del precio básico en boca de mina, para el carbón que se consuma en el país, el Ministerio tendrá en cuenta, entre otros criterios, los precios internos vigentes en el semestre inmediatamente anterior. Para el que se destine al mercado externo tendrá en cuenta el precio medio FOB en puertos colombianos, descontando el valor promedio del transporte entre la mina o minas y tales puertos. En caso de que en el semestre anterior no se hubieren efectuado exportaciones de carbón, se podrá adoptar el precio con base en normas internacionales y valores de carbones semejantes en el mercado externo.

Artículo 34. La fijación del precio básico para efectos de liquidar el impuesto se hará dentro de los treinta (30) días anteriores al respectivo semestre y no podrá ser modificado en el curso del mismo. Si el Ministerio no hiciere tal fijación en el plazo mencionado, regirá el señalado para el semestre inmediatamente anterior.

Parágrafo. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la vigencia de este decreto se señalará el precio correspondiente al primer semestre de 1980.

Artículo 35. Toda persona natural o jurídica que explote carbón mineral, a cualquier título o de hecho, está obligada a presentar a Carbocol, directamente o a través de la alcaldía de ubicación de la mina o minas, dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de cada trimestre calendario, una declaración en la que consten los siguientes datos:

- a) Nombre, domicilio y dirección del declarante.
- b) Número de identificación tributaria (nit) que corresponda al contribuyente para los fines del impuesto sobre la renta.
- c) Nombre y lugar de ubicación de las respectivas minas.
- d) Cantidad de carbón producida en el trimestre a que se refiera la declaración, e información sobre la cantidad de carbón consumido por el mismo productor en el respectivo período.
- e) Nombre, domicilio y dirección de las personas a las cuales hubiere suministrado el carbón producido en el mencionado trimestre.
- f) Cantidad de carbón producido en el mismo trimestre que no hubiere sido entregada a terceros o consumido por el productor.
- g) Cantidad de carbón exenta del pago del impuesto, con la comprobación de los hechos que fundamenten tal exención.
- h) Liquidación privada del impuesto a la producción de carbón o cargo del contribuyente, de acuerdo al artículo 4o. de la Ley 61 de 1979.

Parágrafo. La primera declaración de los productores de carbón correspondiente al primer trimestre de 1980, deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de expedición de este decreto.

Artículo 36. El productor de carbón deberá pagar el valor del impuesto determinado en su liquidación privada, en la misma fecha en que presente su declaración, o dentro de los tres días comunes siguientes. Si el pago se hace pasado dicho término, se causarán los intereses moratorios del uno por ciento (1%) mensual previstos en el artículo 9o. de la Ley 68 de 1923.

El pago se hará en las dependencias de Carboacol en Bogotá. Igualmente podrá consignarse a la orden de Carboacol en las dependencias oficiales o entidades bancarias que señale dicha empresa en cualquier lugar del país.

Artículo 37. La suma que el productor resultare a deber por el impuesto causado durante el primer trimestre de 1980, podrá pagarse en tres (3) cuotas iguales con los pagos de los trimestres subsiguientes.

Artículo 38. Carboacol revisará las liquidaciones privadas que se presenten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de este decreto, y comunicará al contribuyente los errores encontrados con el fin de que proceda a enmendarlos dentro del mes siguiente al recibo de la comunicación mediante la presentación de una declaración de corrección, con su correspondiente liquidación privada, y con base en esta, se efectuará el pago de los ajustes que resulten procedentes, con los respectivos intereses moratorios. En caso de que el contribuyente no corrija los errores indicados por Carboacol, esta entidad remitirá el expediente a la Administración de Impuestos Nacionales del domicilio del contribuyente, con el fin de que se proceda a la práctica de una liquidación de revisión, en la forma y términos previstos en la Ley 52 de 1977.

Las liquidaciones privadas quedarán en firme si no fueren modificadas por la Administración de Impuestos Nacionales dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de su presentación, o de la última adición con corrección de datos básicos que se hubiere presentado.

Artículo 39. Notificada al productor la liquidación de revisión, deberá cancelar los mayores valores dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación y sobre las sumas a su cargo se causarán intereses moratorios de acuerdo con normas tributarias.

Artículo 40. Los productores de carbón deberán registrarse ante la alcaldía del municipio de ubicación de las minas dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de este decreto. Este registro se hará en los formularios elaborados por Carboacol, por triplicado, con consignación de los siguientes datos:

- a) Nombre, domicilio y dirección del productor;
- b) Cantidad de carbón producido durante el año calendario inmediatamente anterior a la fecha del registro;
- c) Nombre, domicilio y dirección de las personas a quienes les haya suministrado carbón a cualquier título durante dicho año.

La alcaldía que reciba el registro remitirá el original a Carboacol, conservará una copia en sus archivos y devolverá la segunda copia al interesado, con la constancia de su presentación.

Parágrafo 1o. El registro deberá renovarse anualmente durante el mes de enero.

Parágrafo 2o. En el primer registro que efectúe el productor deberá incluir los datos sobre producción y destino del carbón a partir del 1o. de enero de 1980. Las personas que inicien actividades de explotación con posterioridad a la fecha de expedición de este decreto, harán el primer registro dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación de dichas explotaciones.

Artículo 41. Las alcaldías, a solicitud de Carboacol, verificarán los datos suministrados por los productores de carbón en el registro de que trata el artículo anterior, informarán oportunamente a dicha entidad sobre los resultados de tal verificación y podrán imponer multas de hasta diez mil pesos (\$ 10.000) en favor del tesoro municipal en caso de llegar a comprobar cualquier inexactitud en los mencionados datos. Carboacol podrá en todo caso verificar directamente la exactitud de los referidos datos.

Artículo 42. A partir de la vigencia de este decreto el Ministerio de Minas y Energía enviará a Carboacol la información que por disposición legal o reglamentaria o estipulación contractual reciba sobre el carbón producido en minas objeto de concesiones, permisos o minas de propiedad privada.

Artículo 43. Las personas naturales y jurídicas que reciban carbón a cualquier título bien sea para consumirlo o transformarlo en su propia industria o planta o para destinarlo al comercio interno o externo, deberán informar semestralmente a Carboacol, directamente o a través de la respectiva alcaldía municipal, sobre los recibos efectuados en el respectivo semestre, con:

- a) Nombre, domicilio y dirección del informante;
- b) Nombre y lugar de ubicación de la industria o planta para la cual se recibió el carbón, y lugar de recibo;
- c) Nombre, domicilio y dirección del suministrador;

d) Cantidades y calidades del carbón recibido;

e) Condiciones y términos del contrato o contratos de compra-venta o suministro. En caso de que tales condiciones constaren en documentos se deberá acompañar copia del mismo.

La omisión o retardo en entregar esta información o la inexactitud comprobada que en ella se incurra, será sancionada a solicitud de Carboacol, por la respectiva alcaldía, con multa de hasta diez mil pesos (\$ 10.000) en favor del Tesoro Municipal.

Parágrafo. En el primer informe que deba ser presentado, se incluirán los datos sobre carbón recibido a partir del 1o. de enero de 1980.

Artículo 44. El Ministerio de Minas y Energía, de oficio, y las alcaldías a solicitud de Carboacol, podrán verificar en cualquier momento la exactitud de los datos que de conformidad con este decreto deban suministrar los compradores y consumidores de carbón. Carboacol podrá en todo caso verificar directamente la exactitud de los referidos datos.

Artículo 45. Carboacol elaborará los formularios sobre los cuales deben hacerse la declaración del impuesto, el registro de la producción y la información sobre consumo de carbón con los fines señalados en el presente decreto.

Artículo 46. En los casos en que Carboacol tuviere conocimiento de que un productor de carbón sujeto al impuesto no ha presentado las declaraciones a que está legalmente obligado, practicará directamente o a través de las respectivas alcaldías una inspección a las instalaciones y, con base en dicha inspección, informará a los contribuyentes sobre las declaraciones omitidas y el valor de los impuestos, conminándolos para que efectúen la presentación de aquellas y el pago de estos.

En caso de que la comunicación no fuere atendida, se enviará el expediente a la Administración de Impuestos Nacionales para la práctica de la liquidación de aforo, con las sanciones previstas en la Ley 52 de 1977.

Artículo 47. Serán aplicables a las declaraciones sobre explotación de carbón las sanciones previstas en la Ley 52 de 1977 para los casos de extemporaneidad, inexactitud o no presentación de las declaraciones tributarias.

Artículo 48. Las personas que en virtud de contratos celebrados con una entidad oficial descentralizada deban pagar a esta cualquier clase de cánones, regalías o participaciones por la exploración o explotación de carbón, tendrán derecho a descontar tales pagos del impuesto determinado en las declaraciones sobre explotación de carbón. Para disfrutar de este descuento los contribuyentes deberán acompañar a sus declaraciones una constancia expedida por la entidad beneficiaria sobre los pagos efectuados con especificación de sus conceptos y valores; o en subsidio, deberán especificar en sus declaraciones el nombre de la entidad beneficiaria, su nit si lo tiene, el valor de los pagos con los conceptos a que correspondan los números y fechas de los recibos de pago, las clases de contratos que originaron los pagos y la fecha de su celebración.

Artículo 49. Serán descontables del monto del impuesto sobre la producción de carbón, de conformidad con el artículo anterior, únicamente las sumas pagadas por cánones, regalías o participaciones durante el trimestre a que se contrae la respectiva liquidación de dicho impuesto. En caso de que las sumas pagadas por los mencionados cánones, regalías o participaciones correspongan a períodos mayores, el descuento se hará en su valor proporcional al de tal trimestre.

Artículo 50. No habrá lugar al pago del impuesto sobre las cantidades de carbón no coquizante suministradas a las plantas térmicas de generación eléctrica para servicio público. Para disfrutar de esta exención el interesado deberá presentar trimestralmente ante Carboacol, constancia expedida por las plantas mencionadas con especificación de la calidad y la cantidad de carbón suministrado para la respectiva operación. A esta constancia deberá agregarse copia de los análisis próximos y de hinchamiento realizados por un laboratorio legalmente reconocido. En caso de que la planta sea administrada por particulares, la constancia deberá ser refrendada por la alcaldía del lugar.

Artículo 51. Están exentas del pago del impuesto las cantidades de carbón no coquizante suministradas directa o indirectamente a plantas o industrias que tengan por objeto la producción de combustibles sintéticos u otros productos que sustituyan el uso de

hidrocarburos. Para disfrutar de esta exención será indispensable que el interesado presente trimestralmente una constancia de los hechos que la fundamenten, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 52. Para los efectos contemplados en este decreto se entiende por carbón coquizante o coquizable aquel que pueda emplearse para la producción de variedades comerciales de coque por procesos de carbonización convencional.

Artículo 53. Para efectos del impuesto sobre la renta serán deducibles de la renta bruta los pagos efectuados por concepto del impuesto sobre explotación de carbón. Para que la deducción sea reconocida, los contribuyentes deberán informar en sus declaraciones de renta y patrimonio los números y fechas de los recibos de pago del impuesto.

Artículo 54. Las personas naturales y jurídicas que perciban rentas provenientes de la explotación de minas de carbón, poseídas o administradas a cualquier título, o provenientes de cánones, regalías o beneficios originados en dicha explotación, deberá relacionar este hecho en su declaración de renta. Esta relación deberá hacerse a partir de la declaración correspondiente al año gravable de 1980 so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 28 de la Ley 52 de 1977.

Artículo 55. De conformidad con lo previsto en el artículo 40., párrafo 3o. de la Ley 61 de 1979, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar el certificado de paz y salvo del Fondo Nacional del Carbón, expedido por Carbocol, por concepto del impuesto sobre explotación de carbón del respectivo año gravable, para que les sean reconocidas las deducciones y exenciones solicitadas en sus declaraciones de renta y patrimonio.

Artículo 56. Será causal de caducidad de los contratos de concesión para explotar carbón y de cancelación de permisos sobre el mismo mineral, el no pago oportuno del impuesto sobre producción de que trata este decreto. El Ministerio decretará dicha caducidad o cancelación de oficio o a solicitud de Carbocol. Igualmente será causal de caducidad de los contratos de concesión y de cancelación de licencias, permisos y aportes sobre carbón, el incumplimiento injustificado de las normas sobre higiene y seguridad mineras que adopte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este caso para proceder a decretar dicha caducidad o cancelación, se requerirá el concepto previo de dicho ministerio respecto de los hechos violatorios de tales normas y sobre la procedencia de la sanción mencionada.

En los anteriores términos quedan adicionados los artículos 86, 125 y 158 del Decreto 1275 de 1970.

Artículo 57. Carbocol entregará trimestralmente del producido del impuesto de que trata este decreto, el veinte por ciento (20%) al departamento y el veinte por ciento (20%) al municipio en cuyos territorios se adelante la explotación carbonífera gravada.

Carbocol por ningún motivo podrá otorgar o autorizar avances en favor de los departamentos y municipios a título de futuras participaciones de estos en el impuesto.

Artículo 58. Los departamentos y municipios podrán utilizar las sumas provenientes de la participación en el impuesto, exclusivamente en gastos de inversión, directamente relacionados con obras públicas, educación, salud, desarrollo agropecuario, fomento minero y defensa de los recursos forestales. En caso de que varíen la mencionada destinación perderán el derecho a tales sumas por el año siguiente en beneficio del Fondo Nacional del Carbón.

La vigilancia de las inversiones de que trata el presente artículo se hará por los Ministerios de Minas y Energía, Obras Públicas y Transporte, Educación, Salud Pública y Agricultura sin perjuicio de las funciones propias de la Contraloría General de la República.

Artículo 59. Carbocol como empresa comercial e industrial del Estado, conservará su actual estructura de sociedad pero la totalidad de sus acciones deberá pertenecer en todo tiempo a entidades descentralizadas del orden nacional. En consecuencia, en cualquier transformación o fusión de las entidades o en toda cesión del interés social o del derecho de suscribir acciones, deberá conservarse el carácter integralmente oficial de su capital.

Artículo 60. Para gozar de los beneficios establecidos en el inciso segundo del artículo séptimo de la Ley 61 de 1979, Carbocol deberá acompañar a su declaración de renta y patrimonio, constancia del

Ministerio de Minas y Energía sobre la inversión efectuada durante el respectivo ejercicio, en exploración, explotación, beneficio y transformación del carbón.

Artículo 61. Para los fines de la renta presunta, se tomará como renta líquida de Carbones de Colombia S. A., "Carbocol", la declarada por la sociedad, antes de restar las inversiones previstas en el artículo séptimo de la Ley 61 de 1979.

Artículo 62. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Minas y Energía,

Alberto Vásquez Restrepo

Registro Nacional de Valores e Intermediarios

DECRETO NUMERO 1167 DE 1980
(mayo 14)

por el cual se determinan las pautas conforme a las cuales se organizará el Registro Nacional de Valores e intermediarios.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 32 de 1979 y oído el concepto de la Comisión Asesora de que trata la misma ley.

DECRETA:

Artículo 1o. El Registro Nacional de Valores e Intermediarios no substituye otros registros y los efectos de estos no se suplen por la realización de aquel.

Artículo 2o. El Registro Nacional de Valores e Intermediarios se hará en libros separados, según la clase de intermediario o documento de que se trate y las inscripciones se llevarán a través de extractos que den razón de lo sustancial del acto o documento que se inscriba, salvo que la ley o la Sala General de la Comisión Nacional de Valores exigieren la inserción del texto completo.

Artículo 3o. El Registro Nacional de Valores e Intermediarios será público. En consecuencia, cualquier persona podrá consultarlo, observando las reglas que señale la Comisión Nacional de Valores para que se garantice su conservación e integridad.

Artículo 4o. Para llevar el Registro será idóneo cualquier procedimiento o sistema técnico, siempre y cuando el que se adopte asegure plenamente la fidelidad, orden, integridad y conservación de lo registrado.

Artículo 5o. Toda solicitud de registro se formulará personalmente o a través de documento auténtico o de apoderado debidamente reconocido y todo documento sujeto a registro o soporte del mismo, si no estuviere autenticado, deberá ser presentado personalmente ante la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 6o. A cada intermediario y a cada título registrado, se le abrirá un expediente en el cual se archivará en orden cronológico de presentación, los documentos a las copias motivo o soporte de la solicitud de registro. Estos expedientes serán públicos en los términos del artículo tercero del presente decreto, salvo que se trate de documentos que por disposición de la ley están amparados por reserva.

Artículo 7o. Los archivos del Registro Nacional de Valores e intermediarios podrán conservarse por cualquier medio técnico adecuado que garantice su reproducción exacta.

En caso de que el método de conservación conduzca a la posibilidad de destruir los originales, el secretario general de la Comisión

Nacional de Valores levantará y firmará un acta en la que anotará qué número y tipo de documentos se reprodujeron. En el caso de microfilms se aplicarán los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 del Decreto 2527 de 1950 y en todos los casos la copia de cualquier pieza del archivo tendrá el mismo valor probatorio que el original.

Artículo 8o. El registro de títulos se llevará teniendo en cuenta la actividad económica del emisor, los tipos de descuento o de interés, plazos, convertibilidad, privilegios y otros factores que determine la Sala General de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 9o. Para la inscripción de un título o la admisión de un intermediario como comisionista de bolsa, las bolsas de valores exigirán la presentación del certificado que acredite que la sociedad o el valor de que se trate, se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

Cuando las bolsas de valores inscriban un título o admitan a un intermediario como comisionista de bolsa, comunicarán tal decisión a la Comisión Nacional de Valores, entidad que hará la anotación respectiva en el registro correspondiente. De igual forma, las bolsas de valores notificarán a la Comisión toda suspensión o cancelación del registro de un título o de la admisión de un intermediario para el mismo efecto.

Artículo 10. En el Registro Nacional de Intermediarios solo podrán inscribirse las personas jurídicas que se hubieren constituido en legal forma y que se encuentren inscritas en la Cámara de Comercio.

Artículo 11. En el Registro Nacional de Valores e Intermediarios deberá inscribirse todo aumento o disminución de capital del emisor o del intermediario y cualquier cambio de la situación jurídica de los mismos. Para tal efecto las Cámaras de Comercio y la Superintendencia Bancaria avisarán de oficio a la Comisión Nacional de Valores sobre las variaciones que ellas registren en estos aspectos.

Artículo 12. En caso de pérdida o de destrucción de un documento registrado este podrá suplirse con un certificado de la Comisión Nacional de Valores en el que se insertará el texto que se conserve, salvo cuando el documento haya sido inscrito en el registro mercantil, en cuyo caso suplirá en la forma prevista por el artículo 44 del Código de Comercio.

El documento así suplido tendrá el mismo valor probatorio del original en cuanto a los actos o hechos que consten en el certificado.

Artículo 13. La Comisión Nacional de Valores deberá certificar acerca de la inscripción de un intermediario o documento, por solicitud de cualquier persona.

Artículo 14. Las certificaciones que expida la Comisión Nacional de Valores serán autorizadas por el secretario de la misma y causarán los derechos que fije la Sala General con la aprobación del gobierno nacional.

Artículo 15. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.

Artículo 16. Las sanciones que imponga la Comisión Nacional de Valores deberán anotarse en el expediente respectivo, del valor o del intermediario, según se trate.

Artículo 17. Los documentos que en la fecha de este decreto sean objeto de oferta pública deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores, previo el cumplimiento de los requisitos fijados por la Comisión, dentro del término que ella misma señale. Entre tanto, podrán continuar negociándose válidamente.

Artículo 18. Los documentos de crédito público que emita el gobierno nacional o aquellos garantizados por él, así como los documentos que emita el Banco de la República y aquellos sobre los cuales considere la Junta Monetaria necesario operar en el mercado financiero y monetario, se considerarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.

Artículo 19. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

Actos de la Comisión Nacional de Valores

DECRETO NUMERO 1169 DE 1980

(mayo 14)

por el cual se fija el procedimiento administrativo que debe seguirse en la expedición de los actos de la Comisión Nacional de Valores y se determinan las consecuencias de su inobservancia.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 32 de 1979 y oído el concepto de la Comisión Asesora creada por la misma ley,

DECRETA:

Artículo 1o. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se determinan en el presente decreto, el ejercicio de las funciones asignadas por la ley a la Comisión Nacional de Valores y a las unidades y dependencias de la misma, se sujetará a las normas generales que rigen el procedimiento administrativo.

Artículo 2o. Las actuaciones de la Comisión Nacional de Valores serán iniciadas e impulsadas de oficio, sin perjuicio de que los interesados insten el procedimiento.

Artículo 3o. La Sala General y el presidente de la Comisión Nacional de Valores adoptarán decisiones en las áreas materia de su respectiva competencia mediante resoluciones de carácter general o particular, de acuerdo con la naturaleza de las mismas.

Además de las reglas fijadas en este decreto, las resoluciones de la Sala General se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento interno de la misma.

Las resoluciones que dicte el presidente de la Comisión Nacional de Valores llevarán la firma del secretario general de la entidad.

Artículo 4o. En aquellos casos en que por la naturaleza de la función de cuyo ejercicio se trate no hubiere lugar a la expedición de resoluciones, los órganos de la Comisión Nacional de Valores actuarán mediante oficios, circulares, instrucciones escritas u otro acto administrativo idóneo, según el caso.

Artículo 5o. Las providencias de carácter general que expidan tanto la Sala como el presidente de la Comisión Nacional de Valores regirán a partir de la fecha de su expedición. Su texto deberá ser publicado en diarios de amplia circulación nacional y copia auténtica de las mismas será remitida a las bolsas de valores.

Las providencias de carácter particular se notificarán de acuerdo con las reglas fijadas en el Decreto-Ley 2733 de 1959 y en las normas que lo adicionen o reformen.

Artículo 6o. Las investigaciones y visitas decretadas por la Comisión Nacional de Valores se sujetarán a las siguientes reglas:

1a. No requieren notificación los actos administrativos por medio de los cuales se decreta la práctica de una investigación o visita.

2a. Cuando por motivo de una visita o investigación sea necesario analizar operaciones finales o intermedias que hayan realizado quienes intervienen en el mercado de valores, el presidente de la Comisión Nacional de Valores podrá exigir de cualquier persona las informaciones que considere pertinentes. Si la persona requerida rehúsa suministrarlas, la Comisión le impondrá multas sucesivas hasta de cien mil pesos.

3a. Los funcionarios comisionados para realizar una visita o investigación podrán decretar durante la diligencia la práctica de las pruebas que estimen procedentes para el análisis de los hechos que se examinen. Así mismo, podrán interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se juzgue necesario.

4a. Cuando ello sea preciso para el cabal cumplimiento de sus funciones, quienes hayan sido designados para practicar una visita o investigación podrán recabar el auxilio de las autoridades de policía competentes, las cuales quedan facultadas para dictar mandamiento escrito para el registro y allanamiento de domicilios. Con el mismo propósito los funcionarios visitantes podrán apremiar con multas hasta de cincuenta mil pesos a quienes deban producir una prueba decretada durante la diligencia.

5a. Practicada una visita o investigación, la Comisión Nacional de Valores elaborará un acta con base en los informes de los visitantes, y enviará un oficio a la persona visitada por el correo certifi-

cado o mediante entrega personal, en el cual se le comunique de la existencia del acta.

6a. Del acta correspondiente se dará traslado al interesado. El traslado se ordenará mediante auto que se entenderá notificado el quinto día hábil siguiente a aquel en el cual se haya remitido el oficio que dé cuenta de la existencia de la respectiva providencia, a la dirección registrada en la entidad.

7a. Para el traslado se mantendrá el acta en la secretaría de la Comisión, sin solución de continuidad y por un término de hasta treinta (30) días, a fin de que el interesado pueda estudiarla allí u obtener copia de la misma. De la realización del traslado dejará constancia el secretario en el expediente respectivo.

8a. Vencido el término del traslado se dictará una resolución motivada para adoptar las medidas que, con sujeción a las normas legales, se consideren procedentes.

Parágrafo. Cuando las investigaciones y visitas sean practicadas por las superintendencias de Sociedades o Bancaria, los informes de los visitadores serán remitidos a la Comisión Nacional de Valores, la cual procederá con sujeción al trámite previsto anteriormente.

Artículo 7o. Las providencias que dicten la Sala General y el presidente de la Comisión Nacional de Valores para imponer las sanciones de su competencia se sujetarán al procedimiento especial que se determina a continuación, con el fin de garantizar el derecho de defensa:

1. Cuandoquiera que la Comisión Nacional de Valores, directamente o por información que le suministren las superintendencias Bancaria y de Sociedades o las bolsas de valores, tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos que conforme a la ley puedan ser susceptibles de sanción ordenará inmediatamente la práctica de las investigaciones pertinentes y comunicará por escrito al presunto infractor las irregularidades que se le imputan, con la solicitud respectiva para que este formule los descargos o presente las explicaciones del caso.

2. De las imputaciones se dará traslado a la persona investigada, por el término que la Comisión Nacional de Valores juzgue necesario, garantizando en todo caso el debido ejercicio del derecho de defensa a fin de que dentro del mismo puedan presentarse las explicaciones y pruebas pertinentes. El traslado mencionado se surtirá mediante la remisión de un oficio a la dirección registrada en la secretaría de la entidad, en el cual se indicarán tanto las imputaciones como el plazo para ejercer el derecho de defensa.

Dicho término se contará a partir de la fecha de recibo de la respectiva solicitud, que deberá enviarse por correo certificado a la dirección que el destinatario tuviere registrada en las oficinas de la Comisión Nacional de Valores o entregarse personalmente en dicha dirección, caso en el cual se dejará constancia escrita de su recibo. Si se remite la solicitud por correo certificado, se presumirá que la fecha de recibo es la de su introducción al correo.

3. Los descargos y explicaciones solicitados por la Comisión deberán rendirse por escrito.

4. La Comisión Nacional de Valores decretará las pruebas que estime convenientes y las que se sean solicitadas por el presunto infractor si fueren pertinentes.

5. Vencido el término a que se refiere el ordinal segundo sin que el presunto inculcado hubiere rendido explicaciones o descargos, la Comisión podrá proceder a tomar una determinación sobre las sanciones aplicables con base en las informaciones y demás pruebas de que disponga.

6. En caso contrario, se agregarán al expediente respectivo las explicaciones y descargos formulados por los presuntos infractores con el fin de tenerlos en cuenta para adoptar las medidas a que hubiere lugar.

7. Las sanciones se impondrán mediante providencias motivadas.

Parágrafo 1. El procedimiento establecido en este artículo no se aplicará en los casos del artículo 6o. del presente decreto.

Parágrafo 2. No obstante lo dispuesto en este artículo, la Comisión Nacional de Valores, como medida preventiva y por un término no mayor de sesenta días, podrá suspender la inscripción de un valor o de un intermediario en el registro correspondiente, de acuerdo con las causales de ley y a partir de la fecha en que se corra traslado de las imputaciones a la persona sumariada.

Artículo 8o. Las intervenciones administrativas de emisores y de intermediarios de valores, que conforme a la Ley 32 de 1979, deba realizar la Superintendencia Bancaria por solicitud de la Comisión Nacional de Valores, se sujetarán a las disposiciones de la Ley 45 de 1923 y demás normas que la adicionen o reformen.

Artículo 9o. En los actos que autoricen una oferta pública de valores deberá indicarse el término dentro del cual ella deberá realizarse. Vencido dicho término sin que la misma se haya efectuado, caducará la autorización y, por consiguiente, deberá obtenerse permiso si se persiste en la oferta por parte del interesado.

Artículo 10. Cuando se trate de una oferta pública de valores cuya emisión o colocación deba ser autorizada por la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Valores se abstendrá de tramitar la autorización de la misma, hasta tanto no se anexe a la petición respectiva copia auténtica de la providencia por medio de la cual se autorizó la emisión o la colocación, con la constancia de su ejecutoria.

Artículo 11. La Comisión Nacional de Valores deberá resolver sobre las solicitudes de autorización de oferta pública o de inscripción de un valor o intermediario en el registro correspondiente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la petición respectiva. Vencido dicho término sin que la Comisión se hubiere pronunciado, se entenderá concedida la autorización a la inscripción, según se trate, salvo que la Comisión lo haya prorrogado previamente, mediante resolución fundada. Dicha prórroga no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se disponga. Vencido este nuevo plazo para todos los efectos legales, se considerará despachada favorablemente la solicitud del interesado.

En las demás solicitudes formuladas a la Comisión se entenderá agotada la vía gubernativa si transcurridos treinta días hábiles no se ha dictado providencia alguna. Esta misma regla se aplicará a los recursos de reposición contra las providencias que dicte dicha entidad.

Artículo 12. Conforme a la Ley 32 de 1979, los actos jurídicos que se celebren como consecuencia de una oferta pública de valores que no haya sido autorizada por la Comisión serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial; y, por consiguiente, no producirán efecto alguno, sin que ello obste para el ejercicio de las acciones restitutorias o de perjuicio a que haya lugar.

Artículo 13. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 32 de 1979, las superintendencias de Sociedades y Bancaria deberán suministrar a la Comisión Nacional de Valores en desarrollo de sus funciones serán técnicos que esta les solicite para el cabal cumplimiento de sus funciones. En el caso de los informes que suministre la Superintendencia Bancaria los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores quedarán sujetos a la reserva bancaria establecida por la Ley 45 de 1923.

Artículo 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las informaciones que obtenga la Comisión Nacional de Valores en desarrollo de sus funciones serán confidenciales, excepto en los casos en que la Sala General del organismo considere indispensable hacerlas públicas para proteger la estabilidad y la regularidad del mercado y para garantizar la defensa de los intereses de los inversionistas.

Salvo la excepción prevista en el presente artículo, respecto de todas las informaciones que obtenga la Comisión Nacional de Valores regirá la reserva bancaria en los términos del artículo 40 de la Ley 45 de 1923 y su violación por cualquiera de las personas que preste servicios en la Comisión dará lugar a la aplicación de las sanciones allí establecidas.

Artículo 15. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores en quienes concurra alguna de las causales de recusación previstas en el Código de Procedimiento Civil deberán declararse impedidos para conocer de los respectivos asuntos o negocios.

Cuando se trate de impedimentos o recusaciones de alguno de los miembros de la Sala General, corresponderá a los demás decidir sobre su aceptación o rechazo. En el primer caso el miembro impedido o recusado se abstendrá de participar en el respectivo negocio. Si se tratare de un ministro del despacho, el Presidente de la República designará a la persona a quien deba corresponder el conocimiento del respectivo asunto. Si fueren el superintendente de sociedades o el representante del Presidente de la República, la desig-

nación la hará el ministro de Desarrollo Económico y tratándose del superintendente bancario, el ministro de Hacienda y Crédito Público.

De los impedimentos o recusaciones del presidente de la Comisión conocerá el ministro de Desarrollo Económico, quien resolverá sobre la persona a quien deba corresponder el estudio y decisión del asunto de que se trate.

De los impedimentos y recusaciones de los demás funcionarios de la Comisión conocerá y decidirá el presidente del organismo, quien designará las personas que deban encargarse del respectivo negocio.

En la tramitación de los impedimentos y recusaciones de que aquí se trata, se observarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 16. El secretario general de la Comisión Nacional de Valores tendrá a su cargo la autenticación de los actos de la Sala General y del Presidente de la entidad, así como la certificación sobre los mismos.

Artículo 17. Las providencias administrativas de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores no serán susceptibles de recursos por la vía gubernativa.

Contra las providencias de carácter particular que expidan los órganos de la Comisión en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, sólo procederá por la vía gubernativa, el recurso de reposición, interpuesto ante la misma autoridad que profirió el respectivo acto y dentro de los términos establecidos por el Decreto-Ley 2733 de 1959 y las normas que lo adicionen o reformen.

Artículo 18. Contra los actos de los órganos de la Comisión Nacional de Valores procederán por la vía Contencioso-Administrativa las acciones fijadas por las normas generales sobre la materia. Ellas deberán interponerse ante el Consejo de Estado, organismo que decidirá en única instancia.

Artículo 19. No se requiere la calidad de abogado para actuar ante la Comisión Nacional de Valores. Pero si se designa mandatario, este deberá ser abogado titulado.

Artículo 20. Toda solicitud que deba ser resuelta por la Comisión Nacional de Valores deberá formularse por escrito y presentarse personalmente ante el secretario de la misma, o a través de documento autenticado o de apoderado debidamente reconocido.

Artículo 21. Tanto los poderes generales como los especiales otorgados para actuar ante la Comisión Nacional de Valores, podrán otorgarse por documento autenticado.

Artículo 22. Para que un apoderado pueda actuar ante la Comisión Nacional de Valores será necesario que, previamente, dicho organismo le haya reconocido su personería, mediante auto que se expedirá una vez se compruebe que el poder ha sido legalmente otorgado y cuando se verifique que el mismo ha sido aceptado expresa o tácitamente por el mandatario.

Artículo 23. Para los efectos del presente decreto se entenderán por días hábiles aquellos en los cuales labore la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 24. La violación de las normas establecidas en el presente decreto producirá los mismos efectos que determinan las normas generales sobre procedimiento administrativo contenidas en el código de la materia.

Artículo 25. Este decreto rige desde la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

**Comisión Nacional de Valores.
Incompatibilidades e inhabilidades**

DECRETO NUMERO 1170 DE 1980
(mayo14)

por el cual se fija el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que estarán sujetas las personas que presten servicios en la Comisión Nacional de Valores.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 32 de 1979 y oído el concepto de la Comisión Asesora de que trata la misma ley.

DECRETA:

Artículo 1o. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a las personas que presten servicios a la Comisión Nacional de Valores, en calidad de miembros de la Sala General, de funcionarios de planta o de contratistas.

Artículo 2o. Las personas de que trata el artículo anterior estarán sujetas a las siguientes inhabilidades e incompatibilidades, además de las específicas que se señalan más adelante.

No podrán por sí ni por interpuesta persona, ni directa ni indirectamente:

- a) Ser accionistas, miembros de juntas directivas, asesores o funcionarios de bolsas de valores.
- b) Ser accionistas, miembros de juntas directivas, asesores o funcionarios de sociedades inscritas en bolsa.
- c) Ser accionistas, miembros de juntas directivas, asesores o funcionarios de sociedades comisionistas de bolsa.
- d) Ser comisionistas independientes.

Artículo 3o. Además de las incompatibilidades e inhabilidades señaladas en el artículo anterior, los miembros de la Sala General de la Comisión Nacional de Valores tendrán las contempladas en los Decretos 128 y 150 de 1976 y demás normas que lo adicionen o reformen, así como las siguientes:

1. El ministro de Desarrollo Económico o su delegado y el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, las propias de sus respectivos cargos.
2. El superintendente de sociedades y el superintendente bancario las fijadas por la ley para sus respectivos cargos.
3. El presidente de la Comisión Nacional de Valores estará sometido a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y por este decreto para los ministros que integran la Sala General.

Artículo 4o. Además de las señaladas en el artículo 2o. del presente decreto, los demás funcionarios de la Comisión Nacional de Valores estarán sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los Decretos 2400 y 3074 de 1968, 150 de 1976 y en las demás normas que los adicionen o reformen.

Artículo 5o. Las personas que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 831 de 1980 fueren contratadas para buscar servicios en la Comisión, tendrán las inhabilidades e incompatibilidades fijadas en el artículo 2o. de este decreto y las contempladas en el Decreto 150 de 1976.

Artículo 6o. Los miembros del Comité Consultivo de que trata el artículo 5o. de la Ley 32 de 1979 no estarán sometidos a las disposiciones del presente decreto.

Artículo 7o. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

**Superintendencia de Sociedades.
Nuevas atribuciones**

DECRETO NUMERO 1171 DE 1980
(mayo 14)

por el cual se distribuyen unas funciones administrativas y se asignan a la Superintendencia de Sociedades ciertas atribuciones para el cabal cumplimiento de la Ley 32 de 1979.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 32 de 1979 y oído el concepto de la Comisión Asesora de que trata la misma ley,

DECRETA:

Artículo 1o. Adiciónase el numeral 1o. del artículo 267 del Código de Comercio con el siguiente ordinal:

"Sobre las sociedades en comandita por acciones cuyas partes alicuotas del capital se negocien en bolsa de valores".

El ordinal a que se refiere este artículo se ordenará como d) y el actual ordinal d) como f).

Artículo 2o. El numeral 5o. del artículo 267 del Código de Comercio quedará así:

"5o. Solicitar la remoción de los administradores o empleados de las sociedades cuyos valores se negocien en el mercado público, cuando por causas atribuibles a dichos funcionarios ocurran irregularidades graves en el funcionamiento de las mismas que puedan comprometer los intereses de los inversionistas. Para tal fin podrá convocar asamblea de socios y juntas directivas e impartir las órdenes correspondientes".

Artículo 3o. En ejercicio de la inspección y vigilancia sobre las sociedades emisoras de valores la Superintendencia de Sociedades, además de las atribuciones consagradas en el Código de Comercio, tendrá las siguientes:

a) Convocar a concordatos preventivos en los casos de ley;
b) Exigir a las sociedades, a sus representantes legales, o a sus directores, los informes que requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones de inspección o que juzgue necesarios para conocer la situación de la compañía, en la forma y términos establecidos por el superintendente, así como ordenar la publicación de los que estime convenientes, en las condiciones y fechas que señale. Si alguna de las personas a las que se refiere este literal deja de rendir algún informe dentro del término fijado o no incluye asunto exigido o no cumple con la publicación requerida, se hará acreedora a multas sucesivas hasta de \$ 100.000, por cada día de retardo, salvo que el término de presentación o publicación hubiere sido prorrogado por el superintendente;

c) Suspender el permiso de funcionamiento en los siguientes casos:

1. Cuando dejen de cumplir las obligaciones que les imponga la Superintendencia.

2. Cuando el superintendente solicite la remoción de un administrador o empleado de la compañía y esta no obre de conformidad dentro del término que se indique;

d) Ordenar la inscripción de acciones en el libro correspondiente cuando la sociedad se niegue a realizarla sin fundamento legal, y

e) Ordenar la venta de las acciones, cuotas o partes de interés que puedan llegar a adquirir las sociedades subordinadas en las sociedades que las dirijan o controlen.

Artículo 4o. Las cámaras de comercio suministrarán a la Superintendencia de Sociedades las informaciones y certificaciones que esta requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Así mismo, las cámaras de comercio inscribirán de oficio las providencias de la Superintendencia por medio de las cuales suspenda el permiso de funcionamiento, decreta la disolución o designe o remueva al liquidador de las sociedades, para lo cual el superintendente compulsará copia auténtica del acto administrativo correspondiente, con la constancia de su ejecutoria.

Artículo 5o. La Junta Monetaria continuará ejerciendo las atribuciones que la ley le asigna para el control monetario, de crédito y de cambios internacionales.

Artículo 6o. De acuerdo con el artículo anterior, permanecerán como funciones de la Junta Monetaria las relacionadas con el efecto monetario, las tasas de interés, los plazos y demás condiciones financieras de los documentos de crédito público que emita el gobierno o de aquellos garantizados por él, así como de los documentos que emita el Banco de la República y de aquellos sobre los cuales la Junta considere necesario operar y regular dentro del mercado financiero y monetario. Estas funciones las continuará desarrollando la Junta Monetaria con arreglo a los estatutos legales que rigen su funcionamiento.

Artículo 7o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

Comisionistas de Bolsa

DECRETO NUMERO 1172 DE 1980
(mayo 14)

por el cual se regula la actividad de los Comisionistas de Bolsa.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el numeral 5o. del artículo 16 de la Ley 32 de 1979, y oído el concepto de la Comisión Asesora integrada para tal efecto,

DECRETA:

Artículo 1o. Son Comisionistas de Bolsa quienes estando inscritos en el Registro Nacional de Intermediarios han sido aceptados por una bolsa de valores.

Deberán constituirse como sociedades colectivas o anónimas, según las disposiciones del presente decreto y podrán establecer sucursales en los términos del artículo 263 del Código de Comercio, siempre que para ello reciban aprobación de la Superintendencia Bancaria, para lo cual se exigirá concepto favorable de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 2o. Los comisionistas de bolsa constituidos como sociedades colectivas tendrán por objeto social exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores inscritos en bolsa.

Los que se constituyan como sociedades anónimas podrán, además, realizar las siguientes actividades previa autorización de la Superintendencia Bancaria y sujetas a las restricciones que indique la Comisión Nacional de Valores.

1. Negociar por cuenta propia valores inscritos en bolsa con el objeto de dar liquidez al mercado.

2. Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de valores inscritos en bolsa.

3. Administrar valores de sus comitentes con la finalidad exclusiva de efectuar los correspondientes cobros de rendimientos.

4. Constituir y administrar fondos de valores.

Parágrafo. Los fondos de valores autorizados en el presente artículo no tendrán personería jurídica.

Artículo 3o. Los comisionistas de bolsa deberán acreditar que su capital asciende cuando menos a dos millones de pesos (\$ 2.000.000) cuando se trata de sociedades colectivas. Si optan por constituirse

como sociedades anónimas, su capital mínimo será de diez millones de pesos (\$ 10.000.000).

No obstante lo anterior, el superintendente bancario podrá exigir un capital superior cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen, previo concepto de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 40. La admisión de los comisionistas de bolsa corresponderá privativamente a ella y su retiro no voluntario quedará sometido al cumplimiento de lo previsto en los reglamentos, y a las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 50. Para que una sociedad sea admitida como comisionista de una bolsa de valores, se requiere, además del cumplimiento de lo establecido en el reglamento de la respectiva bolsa y de los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, que sus socios o accionistas cumplan las siguientes exigencias:

1. No haber sido condenado a pena de presidio o prisión, salvo que la condena haya sido originada en un acto culposo.

2. No haber sido solicitada su remoción de algún cargo en una entidad financiera, por parte del superintendente bancario.

3. Gozar de reconocida honorabilidad e idoneidad en las materias propias de la actividad.

4. Haber cumplido estrictamente con sus obligaciones comerciales.

Artículo 60. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior no da derecho a la sociedad a exigir su ingreso como comisionista de una bolsa de valores, la cual podrá rechazar, de acuerdo con sus reglamentos, las solicitudes que en tal sentido le sean formuladas.

Las decisiones favorables serán comunicadas por la respectiva bolsa a la Comisión Nacional de Valores, con el fin de constatar si se ha realizado la inscripción previa en el Registro Nacional de Intermediarios, requisito sin el cual no podrá desarrollarse la actividad de comisionista de bolsa.

Artículo 70. Son obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que establezcan sus propios reglamentos, las siguientes:

1. Tener a disposición del comitente el comprobante de la operación que haya celebrado para éste, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su realización.

2. Guardar reserva, respecto de terceros, sobre las actividades que realice en relación con su profesión, salvo que exista autorización expresa del interesado o en los casos determinados por la Constitución y la ley.

3. Hacer entrega de los valores y cancelar su precio, sin que en ningún caso pueda aducir falta de provisión.

4. Realizar sus negocios de manera tal que no induzca a error a las partes contratantes.

5. Informar a sus clientes sobre las transacciones ordenadas.

6. Cumplir estrictamente con las obligaciones que contraigan con la bolsa y otorgar las garantías que se les exija.

7. Llevar, además de la contabilidad en la forma indicada por la Comisión Nacional de Valores, un libro para el registro de todas las operaciones que celebren, en orden cronológico y especificando entre otros datos, fecha, valor negociado, precio, plazo, nombre del cliente o comitente y número del comprobante de transacción.

8. Informar a la Comisión Nacional de Valores a través de la respectiva bolsa, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, las operaciones que hayan efectuado en desarrollo de lo previsto en el numeral 10. del artículo 10. del presente decreto.

9. Llevar un libro, en los términos fijados por la Comisión Nacional de Valores, en el cual deberán consignarse los valores que hayan recibido de sus comitentes a efectos de su administración.

10. Verificar la autenticidad de las firmas de sus comitentes y la validez de los poderes de su representante.

Artículo 80. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa, a sus socios y a sus administradores:

1. Representar en las asambleas generales de accionistas las acciones que se negocien en mercados públicos de valores, y recibir poderes para este efecto.

2. Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa.

3. Cobrar comisiones o emolumentos no autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

4. Realizar operaciones que no sean representativas de las condiciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores.

5. Vincular laboralmente a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa que hayan sido sancionados con cancelación en la bolsa o en el Registro Nacional de Intermediarios.

Artículo 90. Los Administradores de las sociedades inscritas como comisionistas de bolsa así como sus socios o accionistas según sea el caso no podrán ser directores, representantes legales ni revisores fiscales de sociedades cuyas acciones o valores se encuentran inscritos en bolsa, salvo de las bolsas de valores, o de su propia sociedad comisionista.

Artículo 10. Las sociedades comisionistas de bolsa constituirán garantías a favor de la respectiva bolsa, de acuerdo con las instrucciones que sobre el particular imparta la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 11. Las sociedades comisionistas de bolsa realizarán su actividad comercial en reuniones celebradas en el recinto de la bolsa durante los horarios que determine la Comisión Nacional de Valores. Para todos los efectos las reuniones se denominarán "ruedas" y en ellas las ofertas y demandas de los valores se harán por el sistema de pregón, hasta tanto la Comisión Nacional de Valores no disponga que se efectúen por otro diferente.

Artículo 12. Toda operación realizada por una sociedad comisionista de bolsa sobre valores inscritos deberá celebrarse durante una rueda. En consecuencia y salvo disposición en contrario de carácter general de la Comisión Nacional de Valores, las concertadas fuera no tendrán efecto alguno.

Artículo 13. Toda oferta y demanda efectuada por una sociedad comisionista de bolsa durante la rueda, la obligará a realizar el negocio en los términos ofrecidos o demandados con la sociedad comisionista que los acepte, antes de que el delegado de la bolsa dé el aviso reglamentario. La aceptación se manifestará con la palabra "conforme" o mediante el sistema que establezca la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 14. Toda operación celebrada durante la rueda, deberá ser avisada inmediatamente a la bolsa por quienes intervinieron en ella.

Artículo 15. Las sociedades comisionistas de bolsa podrán celebrar operaciones cruzadas, en las cuales actúan a la vez a nombre de un comitente comprador y de un comitente vendedor.

Parágrafo. No podrán cruzarse operaciones, sino por lotes de acciones cuyo número no exceda de los que la sociedad comisionista de bolsa ofrezca vender o comprar, según fuere el caso.

Artículo 16. Las sociedades comisionistas de bolsa deberán liquidar todas las operaciones por conducto de la respectiva bolsa, con la entrega de lo negociado y el pago del precio acordado.

Cuando por razones de seguridad, imposibilidad física u otra similar el comisionista vendedor no pueda hacer entrega de los valores transados, podrá entregar a cambio un certificado de la compañía emisora de dichos valores en el cual se aclare que el título o títulos correspondientes están a la orden y disposición de la bolsa.

Artículo 17. Cuando se incumpla una operación de compra, la bolsa procederá a la venta de los valores que el comisionista de bolsa vendedor le haya entregado, correspondientes a la operación incumplida. El producto neto de la venta descontados los gastos, comisiones y emolumentos, le será entregado al comisionista vendedor hasta concurrencia del precio convenido, junto con los intereses moratorios liquidados hasta la fecha del pago.

Si la operación incumplida es la venta, la bolsa, con los dineros que el comisionista comprador le haya entregado, procederá a adquirir y entregar los valores objeto de la operación incumplida hasta concurrencia de la cantidad inicialmente convenida. El comisionista comprador tendrá derecho a recibir los valores negociados, junto con los dividendos y derechos de suscripción, que se hubieren causado entre la fecha de la operación incumplida y el recibo de los valores.

La bolsa hará efectivas las garantías del respectivo comisionista de bolsa hasta la concurrencia de los dineros necesarios para el cumplimiento de las disposiciones aprobadas en este artículo, incluidas las comisiones y demás emolumentos a que haya lugar.

Artículo 18. El representante legal de la bolsa exigirá al comisionista de bolsa vendedor o comprador, según fuere el caso, o a ambos el cumplimiento de las obligaciones por ellos contraídas.

Artículo 19. Cuando un comisionista de bolsa reciba de su comitente dinero con el objeto de adquirir valores, sin que se determine el lapso durante el cual deba cumplir la comisión, ésta se entiende conferida por el término de cinco (5) días hábiles, vencido el cual, si no hubiere sido posible cumplirla deberá devolver al comitente el monto de dinero por él entregado.

Si el comisionista recibiere el encargo de vender valores sin que se especifique el término de la Comisión, éste se entenderá igualmente conferido por cinco (5) días hábiles.

Artículo 20. Los estatutos y reglamentos de la bolsa se presumen conocidos:

1. Por los comisionistas inscritos en ella;
2. Por las personas que negocien valores a través de comisionistas inscritos en bolsa.

Artículo 21. El comitente está obligado a poner a su comisionista en capacidad de cumplir todas las obligaciones inherentes a su encargo y éste no podrá oponer a la bolsa o a sus miembros, en las diferencias que surjan al liquidar la operación, excepciones derivadas del incumplimiento del comitente.

Artículo 22. Las sociedades comisionistas de bolsa deberán presentar sus estados financieros y demás información comercial a la Comisión Nacional de Valores o al organismo que esta determine, de acuerdo con las instrucciones que al respecto aquella imparta.

Artículo 23. Las sociedades comisionistas de bolsa comunicarán a la respectiva bolsa y a la Comisión Nacional de Valores los nombres de las personas en quienes se ha delegado la representación para actuar en las correspondientes ruedas.

Artículo 24. La Superintendencia Bancaria, de oficio o a solicitud de la bolsa o de la Comisión Nacional de Valores, podrá, a título de sanción y dependiendo de la gravedad de la infracción, ordenar la suspensión de actividades de los comisionistas hasta por un año, cancelar su inscripción en bolsa en forma definitiva o imponer multas sucesivas hasta de quinientos mil pesos (\$ 500.000), cuando previa solicitud de explicaciones se cerciöre que estos han violado la ley o reglamento, sus estatutos o los de la bolsa, o dejen de cumplir las instrucciones impartidas por la Comisión Nacional de Valores.

Parágrafo 1. La suspensión o cancelación de la inscripción de un comisionista de valores en el Registro Nacional de Intermediarios, conlleva sanción equivalente respecto de su actividad en bolsa.

Parágrafo 2. La sanción pecuniaria de que trata este artículo podrá también imponerse, sin perjuicio de la que se aplique a la sociedad, a sus directores y representantes legales, a quienes podrá aplicarse igualmente lo establecido en el inciso 2o. del artículo 5o. del Decreto 3233 de 1965.

Artículo 25. Los comisionistas de bolsa no podrán tener agentes ni mandatarios para la actividad que desarrollan y estarán sujetos a las incompatibilidades generales fijadas en el Código de Comercio.

Artículo 26. La Comisión Nacional de Valores podrá ordenar la intervención administrativa de un comisionista de bolsa, hasta cuando desaparezcan las causas que motivaron dicha medida o se decida su liquidación de conformidad con lo previsto en la Ley 45 de 1923, la cual será efectuada por la Superintendencia Bancaria.

Artículo 27. Solamente las personas que cumplan los requisitos exigidos en el presente decreto, podrán utilizar la denominación de comisionistas de bolsa. Quien infrinja esta disposición incurrirá en multas sucesivas de cien mil pesos (\$ 100.000) impuestas por la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 28. La vigilancia y control de las sociedades comisionistas de bolsa corresponderá a la Superintendencia Bancaria, quien la ejercerá de acuerdo con las facultades que le confieren la Ley 45 de 1923 y disposiciones concordantes. La Comisión Nacional de Valores vigilará y controlará todas las operaciones bursátiles que dichas entidades realicen.

Artículo 29. Los comisionistas de bolsa que actualmente operan como tales, dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 1980 para adecuarse a las previsiones del presente decreto y solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Intermediarios.

Artículo 30. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias, en especial los artículos 1305, 1306 y 1307 del Código de Comercio y el Decreto 2969 de 1960 en lo pertinente.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

Créditos de los fondos ganaderos

DECRETO NUMERO 1178 DE 1980
(mayo 14)

por el cual se dictan medidas sobre los fondos ganaderos.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales en especial de las que le confiere el numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución Nacional,

DECRETA:

Artículo primero. El artículo 80 del Decreto 1562 de 1973 quedará así:

"Artículo 80. Los fondos ganaderos podrán financiar a sus depositarios de medianos y bajos ingresos obras de adecuación, corrales, bebederos, cercas, bañaderas, establecimiento y renovación de potreros y otros similares. El valor de estos créditos será redescontable en el Fondo Financiero Agropecuario, previa calificación de la dirección de éste, hasta el 50% del valor del contrato de ganado en participación celebrado con el respectivo prestatario.

La Junta Monetaria reglamentará las tasas de interés, redescuento, condiciones y demás requisitos a que debe someterse esta clase de créditos".

Artículo segundo. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Agricultura,

Germán Bula Hoyos

Préstamos a sociedades calificadas como parques industriales

DECRETO NUMERO 1198 DE 1980
(mayo 16)

por el cual se adiciona el Decreto 2143 de 1979 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 7o. y 8o. de la Ley 41 de 1968,

DECRETA:

Artículo primero. El Instituto de Fomento Industrial, con los recursos provenientes de los "Bonos de Fomento Industrial" de que trata la Resolución Ejecutiva número 177 de 1979, podrá conceder cupos especiales de crédito a la Corporación Financiera Popular y a las corporaciones financieras privadas con destino a préstamos a las sociedades calificadas como parques industriales, sin exceder el 25% del monto total de los recursos captados.

Artículo segundo. Los préstamos concedidos por el Instituto de Fomento Industrial en desarrollo del artículo anterior, devengarán intereses a la tasa del 19% anual y tendrán un plazo máximo de 4 años, sin lugar a refinanciación.

Artículo tercero. Las sociedades calificadas como parques industriales utilizarán las fuentes de financiamiento establecidas para ellas en el artículo 5o. del Decreto 2143 de 1979 con el fin de atender, cumplida y puntualmente los vencimientos de los préstamos de que trata el presente decreto.

Artículo cuarto. Los préstamos de la Corporación Financiera Popular y de las corporaciones financieras privadas a las sociedades calificadas como parques industriales se harán a una tasa no superior al 22%.

Artículo quinto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 16 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Desarrollo Económico,

Gilberto Echeverri Mejía

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El jefe del Departamento Nacional de Planeación,

Eduardo Wiesner Durán

Auxilio patronal de transporte

DECRETO NUMERO 1200 DE 1980
(mayo 20)

por el cual se dicta una disposición sobre el auxilio patronal de transporte.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere la Ley 15 de 1959,

DECRETA:

Artículo primero. A partir del 19 de mayo de 1980 el auxilio de transporte a que tienen derecho los empleados oficiales y los trabajadores particulares que devenguen un salario mensual hasta de dos (2) veces el salario mínimo legal, será de trescientos noventa y un pesos (\$ 391.00) mensuales.

Artículo segundo. Derógase el Decreto 1950 de 1979. Este decreto rige desde su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá a 20 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

El ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Rodrigo Marín Bernal

El ministro de Obras Públicas y Transporte,

Enrique Vargas Ramírez

Corporaciones de ahorro y vivienda

DECRETO NUMERO 1298 DE 1980
(mayo 29)

por el cual se interviene en la actividad de las corporaciones de ahorro y vivienda.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el literal i) del artículo 63 del Acto Legislativo número 1 de 1979,

DECRETA:

Artículo 1o. El monto total de las colocaciones de las corporaciones de ahorro y vivienda, deberá estar representado en la siguiente forma:

a) No menos de un ochenta por ciento (80%) en préstamos otorgados con destino a la financiación de las actividades contempladas en los literales a) y h) del artículo 1o. del Decreto 664 de 1979;

b) No más de un quince por ciento (15%) en préstamos destinados a la financiación de las actividades señaladas en los literales b), c), d), e), g), e i) del artículo 1o. del Decreto 664 de 1979, así como las contempladas en el artículo 3o. del Decreto 1412 de 1979;

c) No menos de un cinco por ciento (5%) en préstamos destinados a la financiación de industrias productoras de materiales de construcción.

Artículo 2o. En las operaciones de crédito de que trata el artículo anterior las corporaciones estipularán los siguientes plazos e intereses:

i) En las operaciones de que trata el literal a) continuarán aplicándose las siguientes condiciones: el plazo para los créditos a constructores será igual al programado inicialmente para la construcción y seis (6) meses más, y la tasa de interés efectiva será del nueve por ciento (9%) anual sobre el valor expresado en unidades de poder adquisitivo constante UPAC. El plazo máximo para los créditos individuales hipotecarios será de quince (15) años y la tasa de interés efectiva del siete y medio por ciento (7½%) anual sobre el valor expresado en unidades de poder adquisitivo constante UPAC.

ii) En las operaciones de que tratan los literales b) y c), la tasa de interés efectiva anual que cobrarán las corporaciones de ahorro y vivienda será del nueve por ciento (9%) sobre el valor expresado en unidades de poder adquisitivo constante UPAC;

iii) El plazo máximo que se otorgará para las operaciones de que tratan los literales b), c), e) y g) del artículo 1o. del Decreto 664 de 1979 será de ocho (8) años. En las operaciones de que tratan los literales d), f) e i) de la misma norma y las contempladas en el artículo 3o. del Decreto 1412 de 1979, el plazo máximo será de cinco (5) años.

Artículo 3o. Entiéndese por "materiales para la construcción", cuyo proceso de producción será financiable por las corporaciones de ahorro y vivienda, los siguientes: cemento, hierro y ladrillo.

Artículo 4o. Las políticas sobre préstamos a las industrias productoras de materiales de construcción se continuarán orientando con base en estudios actualizados que sobre la producción de insumos de la industria de la construcción elabore periódicamente el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 5o. La Superintendencia Bancaria ejercerá el control sobre el cumplimiento de los porcentajes de colocaciones de las corporaciones de ahorro y vivienda señalados en el artículo 1o. de este decreto.

Cuando al término de cada semestre una corporación refleje en su balance defectos en el porcentaje que debe mantener en préstamos con destino a la financiación de la industria, quedará obligada a suplir dicho defecto mediante la inversión en título del FAVI.

Artículo 6o. Las corporaciones de ahorro y vivienda dispondrán de un plazo de dos (2) años, para ajustar sus colocaciones a los porcentajes de que tratan los literales a) y b) del artículo 1o. de este decreto y de seis (6) meses para cumplir con el porcentaje señalado en el literal c) de la misma norma.

Artículo 7o. Las corporaciones de ahorro y vivienda deberán mantener un encaje representado en obligaciones de valor constante, sin interés, emitidas por el FAVI, en los siguientes porcentajes:

a) Trece por ciento (13%) sobre los depósitos en cuentas de ahorro de valor constante;

b) Seis por ciento (6%) sobre los depósitos en certificados de ahorro de valor constante expedidos con plazo de seis (6) meses;

c) Tres por ciento (3%) sobre los depósitos en certificados de ahorro de valor constante expedidos con plazo de doce (12) meses.

Parágrafo. Sobre los depósitos ordinarios las corporaciones continuarán manteniendo el porcentaje del encaje del quince por ciento (15%) señalado por el artículo 7o. del Decreto 1414 de 1976. Los encajes señalados en los literales b) y c) de este artículo se aplicarán a partir del 1o. de junio de 1980. Hasta esa fecha continuará dándose aplicación a lo previsto en el literal b) del artículo 1o. del Decreto 1412 de 1979.

Artículo 8o. Las corporaciones de ahorro y vivienda podrán venir libremente con los depositantes la tasa de interés sobre el valor expresado en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) que reconocerán sobre los depósitos constituidos a partir del 1o. de junio de 1980 bajo la modalidad de "Certificados de Ahorro de Valor Constante", los cuales se continuarán expidiendo con plazos de seis (6) y doce (12) meses.

El certificado de ahorro de valor constante será expedido por sumas superiores a 100 UPAC y con plazo no inferior a seis (6) meses. Si no se cancelare a su vencimiento, se entenderá que el certificado queda automáticamente prorrogado por periodos sucesivos iguales al inicialmente pactado. Las corporaciones de ahorro y vivienda podrán redimir el certificado en cualquier momento, pero en tal caso no reconocerán intereses sobre fracciones de semestre.

Artículo 9o. El presente decreto deroga las siguientes disposiciones: artículos 2o., 3o., 5o., 7o. y 13 del Decreto 664 de 1979; artículo 1o. del Decreto 1412 de 1979 y las demás disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su fecha de expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 29 de mayo de 1980.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jaime García Parra

DETERMINACIONES DE LA JUNTA MONETARIA

RESOLUCION NUMERO 22 DE 1980 (mayo 7)

por la cual se fija precio mínimo de reintegro cafetero.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 56 del Decreto-Ley 444 de 1967 y previo concepto del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros,

RESUELVE:

Artículo 1o. Señálase en US\$ 287,32 el precio mínimo de reintegro por saco de 70 kilogramos, para las exportaciones de café que se efectúen con base en contratos registrados a partir del 9 de mayo de 1980.

Artículo 2o. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición.

RESOLUCION NUMERO 23 DE 1980 (mayo 14)

por la cual se dictan medidas sobre el Fondo de Desarrollo Eléctrico.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los Decretos 2206 de 1963, 444 de 1967 y la Ley 7a. de 1973,

RESUELVE:

Artículo 1o. Autorízase al Banco de la República para redescantar los préstamos que otorguen los establecimientos bancarios a las entidades del sector eléctrico destinados a atender el servicio de las deudas externas con fecha de vencimiento anterior al 31 de diciembre de 1980.

El Banco de la República podrá destinar a la finalidad de que trata el inciso anterior exclusivamente los siguientes recursos:

a) Los ingresos que perciba durante 1980 el Fondo de Desarrollo Eléctrico por concepto de amortizaciones de capital o intereses.

b) Los aumentos que registren las disponibilidades del Fondo de Desarrollo Eléctrico por encima del nivel registrado a mayo 14 de 1980.

El Banco de la República tramitará las operaciones de redescuento de que trata este artículo en la medida en que reciba efectivamente las amortizaciones de capital e intereses y se incrementen las disponibilidades del Fondo de Desarrollo Eléctrico, de conformidad con lo señalado en el inciso anterior.

Artículo 2o. Los préstamos que se concedan en desarrollo de lo previsto en el artículo 1o. de esta resolución se sujetarán a las siguientes condiciones:

a) Tasa de interés, 28% anual.

b) Tasa de redescuento, 27,0% anual.

c) Plazo máximo, tres años.

d) Margen de redescuento, 90% de su valor.

Artículo 3o. Créase un comité conformado de la siguiente manera:

a) El ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

b) El ministro de Minas y Energía o su delegado.

c) El jefe de Planeación Nacional o su delegado.

d) El gerente del Banco de la República o su delegado.

Los redescuentos que apruebe en adelante el Fondo de Desarrollo Eléctrico deberán contar con la previa autorización de este comité.

Las empresas del sector eléctrico, además de acreditar el cumplimiento de los trámites legales que se requieren para adelantar operaciones de crédito, deberán presentar, ante el comité de que trata este artículo, la siguiente documentación:

a) Constancia de Interconexión Eléctrica, S. A., de que la empresa solicitante está a paz y salvo por todo concepto.

b) Comunicación de la dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de que las obligaciones externas de la empresa respectiva se han atendido satisfactoriamente.

c) Una programación financiera de los recursos con que contará la empresa solicitante durante los treinta y seis (36) meses siguientes. En esta programación la empresa solicitante indicará la cuan-

tía de títulos emitidos por el Banco de la República que estaría en condiciones de suscribir.

Artículo 4o. El comité de que trata el artículo anterior, en coordinación con el Departamento de Crédito del Banco de la República, asignará a las empresas del sector eléctrico los recursos de que trata esta resolución, de acuerdo con las prioridades que establezca, para lo cual tendrá en cuenta la situación financiera de cada empresa y las fuentes alternativas de crédito de que dispone.

Artículo 5o. Auméntase en \$ 5.000 millones el límite para la emisión de títulos agro-industriales señalado por la Resolución 12 de 1979. El Banco de la República asignará, como disponibilidad de los fondos Financiero Agropecuario, Financiero Industrial, para Inversiones Privadas y Desarrollo Eléctrico, y según los requerimientos de cada fondo, el producido de las colocaciones de títulos agro-industriales.

Artículo 6o. Esta resolución rige a partir de su fecha de expedición y modifica, en lo pertinente, la Resolución 35 de 1979.

RESOLUCION NUMERO 24 DE 1980
(mayo 14)

por la cual se dictan medidas sobre avales o garantías en moneda extranjera.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el Decreto-Ley 444 de 1967,

RESUELVE:

Artículo 1o. Los avales o garantías en moneda extranjera que otorguen los establecimientos de crédito del país para financiar las importaciones de que trata el inciso 2o. del artículo 1o. de la Resolución 2 de 1980, no estarán sujetos a los límites de capital pagado y reserva legal y crecimiento mensual señalado en los artículos 4o. y 5o. de la Resolución 33 de 1976.

Artículo 2o. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición.

RESOLUCION NUMERO 25 DE 1980
(mayo 14)

por la cual se dictan medidas sobre los cupos de crédito de los fondos ganaderos en el Banco de la República.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el Decreto-Ley 2206 de 1963, la Ley 5a. y el Decreto 1562 de 1973,

RESUELVE:

Artículo 1o. El Banco de la República cobrará a cada fondo ganadero por el uso de los cupos a que se refiere la Resolución 48 de 1975, las siguientes tasas de interés:

a) 8% para los descuentos de operaciones que no excedan del nivel utilizado por cada fondo a 9 de febrero de 1979.

b) 13% para los descuentos de operaciones que excedan del nivel utilizado por cada fondo con posterioridad al 9 de febrero de 1979.

Artículo 2o. Los fondos ganaderos podrán redescantar, con cargo a los recursos asignados anualmente al Fondo Financiero Agropecuario, los préstamos efectuados a sus depositarios para adecuación de fincas, hasta por una cuantía equivalente al 50% del valor del contrato dado en participación, en las mismas condiciones de plazo, intereses, margen y tasa de redescuento estipulados para el sistema bancario.

Artículo 3o. El Banco de la República tomará las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 4o. Esta resolución deroga el artículo 6o. de la número 48 de 1975, la número 10 de 1979 y rige desde la fecha de su expedición.

RESOLUCION NUMERO 26 DE 1980
(mayo 28)

por la cual se dictan medidas sobre el Fondo para Inversiones Privadas y el Fondo de Desarrollo Eléctrico.

La Junta Monetaria de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los Decretos 2206 de 1963, 444 de 1967 y las Leyes 60 de 1968 y 7a. de 1973,

RESUELVE:

Artículo 1o. Para complementar los recursos de crédito del sector turístico, el Fondo para Inversiones Privadas, en la medida de su capacidad financiera, podrá conceder préstamos a dicho sector, con el fin de financiar la industria hotelera orientada al fomento del turismo internacional.

Artículo 2o. El literal a) del artículo 1o. de la Resolución 23 de 1980 quedará así:

"a) Los ingresos que perciba durante 1980, el Fondo de Desarrollo Eléctrico por concepto de amortizaciones de capital".

Artículo 3o. Esta resolución modifica en lo pertinente el artículo 1o. de la número 23 de 1980 y adiciona al artículo 1o. de la número 20 del mismo año y rige desde la fecha de su expedición.

Índice de medidas legislativas y ejecutivas de orden económico

Número y fecha	Diario Oficial en que se promulgó		Tema
	Número	Fecha	
Decreto-Ley			
831	Abr. 9	35.506 Abr. 28 80	I—Señala a la Comisión Nacional de Valores como una unidad administrativa especial vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico la cual deberá estimular, organizar y regular el mercado público de valores. II—Determina su estructura y organización y le asigna funciones a sus órganos y dependencias internas. III—Faculta a la Comisión Nacional de Valores para crear un fondo especial de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 32 de 1979 y le señala su reglamento. IV—Dispone que los documentos de crédito público que emita el gobierno nacional o garantizados por él, así como los que emita el Banco de la República y aquellos sobre los cuales considere la Junta Monetaria necesario operar en el mercado financiero y monetario, se entenderán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
Ministerio de Justicia			
Decreto			
959	Abr. 28	35.524 May. 26 80	Crea y designa la comisión revisora del Código Civil.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público			
Decretos			
780	Abr. 2	35.506 Abr. 28 80	I—Asume el gobierno nacional como deuda pública de la Nación las deudas por importaciones del IDEMA hasta por US\$ 78 millones contraídas a septiembre 22 de 1976. II—Faculta al ministro de Hacienda y Crédito Público, al gerente del Banco de la República y al gerente del IDEMA para suscribir un acta en la que conste la situación actual de las operaciones de redescuento previstas en las Resoluciones 56 y 59 de la Junta Monetaria. III—Dispone que el Banco de la República deberá financiar al gobierno nacional la totalidad de la deuda sin incrementar los cupos de endeudamiento del gobierno. IV—Determina que el gobierno nacional y el Banco de la República celebrarán el correspondiente contrato de conformidad con las condiciones financieras señaladas por la Junta Monetaria, el cual deberá ajustarse además a lo prescrito por el artículo III y siguientes del Decreto 150 de 1976.
820	Abr. 8	35.506 Abr. 28 80	Adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y abre créditos adicionales en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 1980 (Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Agricultura) por la suma de \$ 1.162.285.640,33.
895	Abr. 18	35.530 Jun. 3 80	I—Introduce algunas modificaciones en la nomenclatura del Arancel de Aduanas aprobadas por la Decisión 145 y 146 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II—Dispone que la importación de mercancías sujetas a cuotas de fomento requieren consignación previa en el Banco de la República. III—Determina que los papeles de seguridad para la impresión de billetes de banco, pagarán un gravamen del 1% ad-valorem únicamente cuando sean importados por el Banco de la República por la posición arancelaria 48.01.05.02. IV—Establece que la exportación de mercancías estará libre de gravámenes. V—Señala los impuestos de consumo los cuales se recaudarán en las aduanas del país sobre el propio manifiesto de importación.
916	Abr. 25	35.524 May. 26 80	I—Ordena la emisión de títulos de deuda pública interna denominados "Bonos Parque Simón Bolívar" por \$ 627.123.000, con plazo para su total amortización de diez años. II—Señala las características de los Bonos Parque Simón Bolívar y dispone que el producto de la emisión se destinará al pago parcial del precio de compra de los terrenos para dicho parque en la ciudad de Bogotá.
953	Abr. 28	35.524 May. 26 80	Autoriza al ministro de Hacienda y Crédito Público para gestionar a nombre del gobierno la apertura y utilización de cartas de crédito hasta por US\$ 26 millones, con interés anual de ½% para depósitos en dólares a seis meses. Estas operaciones de crédito se destinarán a financiar equipos para la Armada Nacional.
960	Abr. 20	35.521 May. 21 80	Autoriza al ministro de Hacienda y Crédito Público para que en nombre del gobierno gestione y negocie la garantía que la Nación otorgará al empréstito externo que proyecta celebrar el Banco de la República con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento —BIRF— hasta por US\$ 150 millones, con plazo para su total amortización de diecisiete años, periodo de gracia de cuatro años, interés anual de 8,5% y comisión anual de compromiso de ¼%. Esta operación de crédito se destinará a financiar la octava línea de crédito para las corporaciones financieras.

Índice de medidas legislativas y ejecutivas de orden económico

Número y fecha	Diario Oficial en que se promulgó		Número	Fecha	Tema
Superintendencia Bancaria					
Resolución					
2103	Abr.	25	35.542	Jun. 23 80	Señala las tarifas máximas que los almacenes generales de depósito pueden cobrar por los servicios de manejo y distribución de las mercancías que les sean depositadas.
Junta Monetaria					
Resoluciones					
19	Abr.	23	( )	( )	I—Autoriza a los establecimientos de crédito para efectuar giros sin el requisito de licencia de cambio individual y señala los conceptos sobre los cuales se podrán efectuar. II—Faculta a la Oficina de Cambios para autorizar giros al exterior por residentes en Colombia para el sostenimiento de personas a quienes se deban alimentos. III—Dispone que la Oficina de Cambios podrá autorizar licencias de cambio por concepto de intereses causados a 31 de diciembre de 1979, derivados de la financiación de importaciones por parte de los establecimientos de crédito del país, por las entidades de que trata el artículo 132 del Decreto-Ley 444 de 1967, y por los proveedores del exterior que no hayan podido reembolsarse a través de los canales ordinarios por pérdidas de los documentos o falta de registro, cuando se trate de líneas de crédito directo. Este régimen estará vigente hasta el 31 de octubre de 1980.
20	Abr.	23	( )	( )	Señala los criterios para los préstamos que otorguen los establecimientos de crédito con cargo a los recursos del Fondo para Inversiones Privadas, así como los plazos, tasas de interés, redescuento y márgenes de redescuento.
21	Abr.	30	( )	( )	I—Dispone que el encaje señalado por el artículo 1o. de la Resolución 9 de 1980 se aplicará a los depósitos constituidos en las corporaciones financieras por los establecimientos públicos del orden nacional, cuya finalidad principal consista en el pago de prestaciones sociales al sector público o privado, antes del 30 de enero de 1980. Después del 30 de marzo de 1981 tendrán un encaje del 80%. Este régimen se aplicará a los nuevos depósitos que constituyan con posterioridad al 30 de enero de 1980 y antes del 30 de marzo de 1981 con tales recursos siempre y cuando hayan vencido o venzan durante este periodo. II—Faculta al superintendente bancario para adoptar las medidas indispensables para el cumplimiento de lo ordenado en esta norma.

INDICE ECONOMICO

Selección de artículos de las publicaciones recibidas por la Biblioteca y Hemeroteca
del Departamento de Investigaciones Económicas durante 1977

AHORRO Y ECONOMIA

432—Decreto número 2176 de 1977 (septiembre 13). Rev. Ban. Rep. 50(599): 1287-1288 St. '77. Bogotá.
Por el cual se interviene en la actividad de las cajas y secciones de ahorro de los bancos comerciales.

2117—Evolución del ahorro financiero en Colombia. Carta Finan. 4(3): 6-22 My.-Jn. '77. Bogotá.

Contenido: Antecedentes hasta 1965. - Comportamiento del ahorro a partir de 1965. - Cambio de las políticas de ahorro. - 1974. - Inflación, ahorro, medios de pago. - Conclusiones.

1084—Nuevas fórmulas de ahorro. M. Valores 37(22): 410-412 My. '77. México.

Se refiere a México.

Contenido: Régimen de tasas libres. - Depósitos retirables. - Sustitución gradual. - Depósitos de Nacional Financiera.

432—Resolución número 19 de 1977 (marzo 23) Rev. Ban. Rep. 50(593): 374 Mz. '77. Bogotá.

La Junta Monetaria crea un grupo a favor de las corporaciones de ahorro y vivienda.

Véase además:

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL

Y MINERO.

COSTO Y NIVEL DE VIDA

INVERSION DE CAPITALES

SEGUROS

Alemania Occidental

véase:

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Alemania Oriental

véase:

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

ALGODON

1394—Ecevit, Leyla U. Recent developments in the world cotton market and the future outlook. St. Pap. 24(2): 380-404 Jl. '77. Washington.

Contenido: Changes in supply and demand. - Determinants of cotton consumption. - Consumption prospects and future outlook for cotton. - Gráficas y cuadros.

2186—Jaramillo, Oscar. Industria de altilbajos. N. Frontera. 154: 10-11 Nv. '77. Bogotá.

A la cabeza de título: El algodón.

Contenido: La "lotería" del algodón. - Empeño gubernamental.

2186—Jaramillo, Oscar. Replanteamiento o muerte. N. Frontera. 156: 13-14 Nv. '77. Bogotá.

A la cabeza de título: El algodón.

Contenido: Una salida transitoria. - Mejor productividad. - Estabilización de precios.

2186—Jaramillo, Oscar. Riesgos y evidencias del desarrollo ecológico. N. Frontera. 157: 16-17 Nv. '77. Bogotá.

A la cabeza de título: El algodón.

Contenido: En todo el mundo. - Situación patética. - Costos y escasez. Administración de plagas.

ALIMENTOS-INDUSTRIA Y COMERCIO

2175—Alimentos: una comercialización más eficaz aumentaría sus existencias. Not. del BID. 4(1): 4-5 Fb. '77. Washington.

Contenido: Un desarrollo integrado.

2186—Galán, Luis Carlos. Si la sal se corrompe. N. Frontera. 125: 18-19 Ab. '77. Bogotá.

Contenido: La producción. - La distribución. - El problema. - Empleo para guajiros.

186—El IDEMA y la leche. Estrategia. 5: 7 Oc. '77. Bogotá.
A la cabeza de título: Economía.

446—Investigaciones realizadas en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Colombia en el área de alimentos enriquecidos. Tecnología. 19(109-110): 5-65 St./Dc. '77. Bogotá.

446—R. de Sandoval, Ana Mercedes. El método del perfil de la textura y su aplicación en alimentos colombianos. Tecnología. 19 (105): 19-26, 32 En.-Feb. '77. Bogotá.

Contenido: Introducción. - Algunos principios del método. - Aplicaciones del método de perfil de la textura.

446—Salazar de Buckle, Teresa y otros. El modelo de dietas de costo mínimo aplicado a la evaluación de algunos alimentos industrializados. Tecnología. 19(108): 9-26 Jl.-Ag. '77. Bogotá.

446—Villalobos C., Margy y otros. Evaluación de calidad de mermeladas colombianas. Tecnología. 19(107): 32-42 My.-Jn. '77. Bogotá.

AMERICA LATINA-CONDICIONES ECONOMICAS

672—Aftalion, Marcelo E. La política exterior estadounidense y América Latina. Com. Ext. 27(2): 234-238 Fb. '77. México.

Contenido: Vigencia norteamericana en las relaciones internacionales. - El triunfo de Carter. ... - Los problemas principales.

672—Astori, Danilo. Algunas características de la industrialización en América Latina. Com. Ext. 27(2): 212-226 Fb. '77. México.

Contenido: La industrialización dependiente. - El papel de la industrialización en el proceso económico general. - Las tendencias más recientes y algunas perspectivas.

672—Bitran, Daniel y Wolfgang Konig. Las empresas transnacionales y las exportaciones de manufacturas de América Latina; algunas consideraciones. Com. Ext. 27(7): 786-793 Jl. '77. México.

Contenido: Consideraciones sobre el marco general en que operan las empresas transnacionales en América Latina. - Areas conflictivas de la actividad de las empresas transnacionales en la región. - Algunos antecedentes cuantitativos sobre la operación de las empresas transnacionales en América Latina. - Síntesis y conclusiones.

1690—La currencies in 1977 are up against pressures and some question marks. Bus. Lat. Am. 3: 73-75 Mz. '77. Nueva York.